

PERIODO  
PRESIDENCIAL  
002533  
ARCHIVO

## **INFORME DE ANALISIS**

**(AL 18 DE ENERO DE 1991)**

**MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**

## **1. ANALISIS POLITICO**

### **PERSPECTIVAS PARA 1991.**

#### **A. Escenarios sociales potencialmente conflictivos en 1991.**

Adicionalmente a las tensiones que previsiblemente se producirán en torno al problema de las relaciones cívico-militares con la entrega al conocimiento público del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación y con los eventuales desarrollos de los otros hechos que afectan a miembros del Ejército, el panorama previsible de escenarios sociales potencialmente conflictivos para 1991 es el siguiente:

1. En el ámbito laboral, es altamente probable que el Gobierno enfrente un conflicto con los sindicatos que agrupan a trabajadores de Ferrocarriles, a raíz de las iniciativas legislativas que el Ejecutivo iniciará sobre la empresa. Este conflicto probable presentaría además la particularidad de repercutir en las bancadas parlamentarias de la Concertación. De acuerdo a la información disponible, hay un número importante de diputados demócrata cristianos que ya han reaccionado negativamente a la información sobre las características que la reestructuración de Ferrocarriles asumiría, lo que probablemente se explica, entre otras cosas, por la filiación política predominante en los sindicatos de esta empresa pública.

Una situación similar a la previsible en Ferrocarriles podría originarse en el caso de CODELCO, dependiendo del contenido que en definitiva asuma la iniciativa gubernamental sobre esta empresa y el modo como los sindicatos del cobre perciban afectados sus intereses por esa iniciativa.

En el caso del sector público, merecen mención especial los empleados del poder judicial, que mantienen desde hace años una reivindicación por mejoras salariales. En el pasado, esta reivindicación fue sorteada hábilmente por el difunto Ministro Rosende. La demanda sigue presente y se podría pensar que, en el contexto de una discusión sobre reformas al poder judicial, este sector fuera apoyado y aún acicateado en su comportamiento reivindicativo por magistrados de los tribunales superiores, con la finalidad de dificultar la política legislativo-judicial del Gobierno, haciendo la situación más compleja al abrirle un nuevo frente.

También merece una mención especial el caso de los trabajadores de la salud (FENATS), donde tanto la situación económica del sector como la identidad política de la dirección sindical permiten asignar una probabilidad importante al surgimiento de conflictos, aunque presumiblemente no muy severos.

En el sector privado, hay un sólo gremio importante respecto del cual podrían esperarse actitudes y comportamientos conflictivos: los microbuseros. Sin embargo, todo parece indicar que las diferencias que puedan plantearse con ellos son subsanables, sin que haya mayor riesgo de que se escalen hacia un conflicto de proporciones.

Finalmente, hay que destacar que en el mes de abril está convenido renovar con la CUT un nuevo acuerdo respecto de temas como salario mínimo y análogos, proceso que ya está en marcha. Respecto de la Central, hay que considerar también su potencial involucramiento, a través de apoyos, en algunos de los conflictos previsibles ya identificados. Como política general del Gobierno, se puede sugerir un comportamiento tendiente a un manejo de los conflictos que evite o neutralice esa potencial participación de la Central, mediante una focalización y sectorialización de ellos que impida que alcancen una relevancia y visibilidad nacionales, que estimule o fuerze a la Central a involucrarse activamente.

2. En el ámbito empresarial, salvo la ocurrencia de eventos extraordinarios, el único sector que plantear problemas de alguna envergadura es el de los agricultores, aún cuando los recientes anuncios sobre la creación de una comisión conjunta con el sector financiero para estudiar el problema del endeudamiento y sobre iniciativas legales para modificar la obligación de contabilidad agrícola deberían aquietar las inquietudes del sector por un tiempo. Respecto del resto del sector empresarial, los únicos puntos de confrontación podrían originarse en torno a lo que resta de las reformas laborales, pero aquí todo indica que los acuerdos alcanzados permitirán una consolidación tranquila de esas reformas.

## **B. La Cohesión de la Concertación.**

Obviamente, la mantención de un alto nivel de cohesión entre las principales fuerzas políticas de la Concertación es una condición necesaria para lograr una buena gestión de Gobierno en 1991. Al menos en el horizonte del primer semestre del año, las siguientes cuestiones deberían ser objeto de atención preferente, en cuanto pueden significar tensiones potencialmente disruptivas al interior de la coalición.

Primero, hay que tomar en cuenta que en la reforma municipal la actitud e intereses opositores no son el único factor que ha entrabado una rápida solución al problema. En efecto, hasta ahora hay divergencias importantes entre los partidos sobre materias tan centrales como el procedimiento de elección de alcaldes, el sistema electoral, la regulación de los pactos y las posibles atribuciones del concejo municipal. Estas diferencias han impedido llegar a una posición común y concreta sobre el tema. Se hace necesario, en consecuencia, activar las conversaciones entre los partidos de modo de alcanzar un acuerdo, en lo posible antes de la reposición de la iniciativa de reforma constitucional en la Cámara. La persistencia de las diferencias abre flancos en las negociaciones con la oposición y debilita la posición negociadora del Gobierno y la coalición.

Segundo, como se indicó anteriormente, hay también diferencias respecto de problemas como el de Ferrocarriles y potencialmente otros, como el caso de CODELCO y las empresas CORFO. Sobre estas materias, lo primordial parece ser evitar una ideologización de estas cuestiones. Este riesgo de ideologización se ve acentuado por discusiones al interior del Gobierno sobre estrategia de desarrollo, y tanto al interior de los partidos como entre ellos sobre el rol del Estado en la economía. De este modo, habría que evitar que el caso de Ferrocarriles llegue a ser objeto de una polémica interna más general centrada en la cuestión general de las empresas públicas. Además de perjudicar el clima de confianza económico, una polémica semejante tendría un gran potencial disruptivo en las relaciones entre los partidos. Lo aconsejable es situar estos problemas en términos técnicos, fundamentando la necesidad de las innovaciones por referencia a las dificultades concretas enfrentadas, a las prioridades sociales que se verían postergadas si no hay soluciones rápidas y al imperativo de crecimiento que es vital para el éxito del Gobierno.

Finalmente, hay que prever posibles diferencias de opinión respecto de cuestiones relacionadas con derechos humanos y el desenlace del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, además de potenciales discrepancias sobre el tratamiento de asuntos como el informe de la Comisión Cheques y análogos. Si bien no se divisan razones para que estas posibles diferencias no se puedan zanjar convenientemente, habría que estar atentos a dificultades internas que podrían surgir en relación con estas materias, para anticipar soluciones a ellas.

**C. El "mundo de los derechos humanos", la izquierda no concertación y la ultra izquierda.**

Es más que probable que el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación y las decisiones que se sigan a partir de él provoquen descontento en las organizaciones y agrupaciones de derechos humanos y en las minorías más activas vinculadas a la demandas por verdad y justicia. Este efecto y la tensión que producirá entre este "mundo de los derechos humanos" y el Gobierno es inevitable.

Nuestro problema reside en evitar que esta tensión se consolide en una franca alienación de este sector de la población respecto del Gobierno y sus partidos, alienación que puede ser explotada tanto por la izquierda no concertación como por la ultra izquierda con miras a movilizaciones opositoras que podrían ensombrecer el cuadro general de relaciones sociales y políticas y poner al Gobierno en dilemas indeseables.

Un primer punto a considerar es que la izquierda extra parlamentaria (PC, MIR político) casi con certeza ha fracasado en sus esfuerzos por abrir su arco de alianzas hacia los partidos de la Concertación respecto del horizonte de futuras elecciones municipales. El efecto ineludible de ese fracaso consistirá en que la estrategia de esa izquierda privilegiará aún más la acentuación de sus diferencias con el Gobierno y sus partidos, activándose como oposición de izquierda. Para esta estrategia, es casi natural explotar el descontento del "mundo de los derechos humanos", intentando llevarlo a movilizaciones crecientemente más radicalizadas, con un claro signo opositor.

Luego, hay que tomar en cuenta que ese clima de descontento puede también ser explotado por grupos de ultra izquierda (Lautaro, Frente Autónomo, MIR militar), con el fin de recomponer frentes sociales que le sean útiles para amparar y aún legitimar popularmente su actividad violentista. Al respecto, debe destacarse que en la "toma" de la cárcel pública protagonizada este mes por familiares de presos políticos, hay evidencia de la actuación del Frente Autónomo y grupos lautaristas, que llegaron incluso a ser capaces de originar un documento, claramente opositor respecto de la política gubernamental, presentado públicamente como suscrito aún por las agrupaciones de derechos humanos históricas. De estos hechos se puede colegir la presencia de una estrategia de ultra izquierda, orientada a apropiarse del "mundo de los derechos humanos" y sus reivindicaciones, para canalizarlo y movilizarlo contestariamente contra el Gobierno.

Parte de la respuesta a estos riesgos tendría que consistir en un diseño cuidadoso de la política que se seguirá frente a los presos. Los grupos de ultra izquierda ya referidos han comenzado a reclamar el status de presos políticos para los detenidos por acciones terroristas y delictuales después del 11 de marzo, lo que seguramente persigue legitimar ante los sectores populares la idea de la validez de una oposición insurreccional al Gobierno, en cuanto mera continuación de la dictadura. Habría que evitar situaciones que pudieran servirles para fabricar la imagen de un gobierno represivo, a través de un tratamiento de los presos que impida que se genere una cohesión y una solidaridad extendidas al conjunto del "mundo de los derechos humanos", fenómeno que claramente haría más difícil la política de aislamiento de los grupos de ultra izquierda.

Sin embargo, lo más importante en la respuesta a los riesgos indicados tiene que residir en las políticas de reparación definidas a partir del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, en la comunicación adecuada al "mundo de los derechos humanos" de la justeza de la política gubernamental en materia de justicia y en la mantención de una relación permanente con las organizaciones y agrupaciones que les proporcionen el sentimiento de participar en la resolución de todos estos difíciles problemas.

#### **D. La oposición de derecha.**

Nuestra estrategia frente a la oposición ha consistido en mezclar adecuadamente la confrontación con la cooperación (negociación), poniendo un énfasis en la cooperación en razón del objetivo central de la transición -- consolidar una democracia estable --, procurando evitar a la vez el riesgo de renunciar a los objetivos del Gobierno, deslavándolos. No se divisan razones para abandonar tanto esta estrategia como el énfasis que ella supone.

Los escenarios de conflicto con la derecha no parecen encerrar riesgos graves.

Respecto de la reforma municipal, una vez que la Concertación logre un acuerdo, no es previsible que se produzcan conflictos insolubles, no susceptibles de una negociación adecuada. Adicionalmente, hay que considerar que la iniciativa de reforma constitucional se repondrá en la misma época en que se dará a conocer el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, cuyos efectos probablemente llevarán a la derecha a buscar limpiar su imagen. Ello debería permitir negociar en mejores condiciones con estos partidos.

En el caso de las iniciativas de reforma del poder judicial, tampoco son previsibles conflictos de envergadura. Aparte de que la especialización del tema lo hace distante de la opinión pública, hay un consenso importante en la mayoría de los aspectos involucrados y muchos puntos son claramente susceptibles de negociaciones satisfactorias.

Sin embargo, no hay que olvidar que la creciente cercanía de las elecciones municipales es un claro incentivo para el reagrupamiento de la derecha y para posiciones sostenidas en común con mayor frecuencia que durante 1990. Además, la cercanía creciente de ese horizonte electoral también incentivará a los partidos de derecha a acentuar sus diferencias con el Gobierno, incluyendo arranques populistas, de los cuales el reclamo del senador Piñera respecto del no pago del reajuste a los jubilados que aún no lo han recibido es un ejemplo típico. Por consiguiente, la probabilidad es alta de enfrentar a una derecha más cohesionada y más dura, lo cual llevará a una relación potencialmente más difícil con ella, pese a que el contenido de los escenarios previsibles no se preste a una confrontación muy intensa.

Tampoco hay que olvidar que el tema de las reformas constitucionales políticas í es un escenario de alto conflicto. En este punto, la posibilidad de acuerdos es muy remota, porque esas reformas afectan los **enclave autoritarios** o **reservas autoritarias** de la derecha (senadores designados, sistema electoral, Tribunal Constitucional, etc). Si estos temas son puestos en la agenda legislativa de 1991, los incentivos para la confrontación aumentarán.

Un punto crucial en el objetivo de acentuar en la relación con la derecha la cooperación más que la confrontación dice relación con el **estilo con que se la trata**. En un ambiente de negociación parlamentaria obligada por la presencia de los senadores designados, el cuidado en los **adjetivos** y en el **tono** puede ser tan importante como el contenido. Para ser fieles a la estrategia de acentuar la cooperación, parece básico evitar descalificaciones cuyo escalamiento puede conducir, aún inadvertidamente, a un clima de polarización.

#### **E. El año de las políticas sociales y las realizaciones.**

Simplificando las cosas al extremo, podría decirse que tal como 1990 fue el "año de los empresarios", 1991 debería ser el "año de los pobres" o de "la política social y las realizaciones". Obviamente, es un problema de énfasis en las actitudes y política comunicacional del Gobierno. No se trata ni de relegar a un lugar secundario la meta del crecimiento, ni de hacer cosas que pongan en peligro el clima de confianza empresarial ganado.

El acento en la política social se requiere por diversas razones, además del compromiso del Gobierno con la justicia social. Hay expectativas fuertes de mejoramiento, que si bien existían ya en marzo de 1990, han sido postergadas por la población hacia los años venideros, comenzando con 1991. Segundo, el carácter conflictivo de muchos problemas sectoriales y de algunos problemas nacionales -- por ejemplo, el de derechos humanos --, se puede atenuar y adquirir menor visibilidad social si se difunde la percepción y el sentimiento de que, superados ciertos problemas, el Gobierno **efectivamente está haciendo cosas en ayuda de la gente**, en ámbitos tan concretos como los problemas de salud, educación y vivienda, y llevando adelante **realizaciones** (obras públicas).

Adicionalmente, este énfasis es necesario para progresar en la legitimación de la meta de crecimiento en el contexto de una economía abierta que descansa en la iniciativa privada. En ausencia de este énfasis, corremos el riesgo de una desestabilización del conjunto de nuestras políticas a partir de la difusión de la idea de que nuestro esquema sólo sirve para beneficiar a los ricos.

Este acento en lo social y en las realizaciones tendría que ir asociado a políticas comunicacionales eficaces, que permitan hacer socialmente visible la obra del Gobierno, y a un esfuerzo por mejorar al máximo la capacidad de gestión, entendiendo que en esta materia los avances que se pueden lograr son siempre lentos y menores dada la envergadura de la maquinaria estatal.

#### **F. La creación y preservación de un clima económico optimista.**

Además del acento en lo social, es importante mantener en clima económico de optimismo, no sólo en los medios empresariales, sino difundido al conjunto de la población.

Este clima es necesario para el éxito de nuestras políticas económicas, pero a la vez genera efectos políticos significativos, de los cuales el principal reside en restarle centralidad a los potenciales conflictos políticos y sectoriales. Para tomar un caso extremo, son bien distintas las posibilidades de manejo de una situación de relativa crisis en el ámbito de las relaciones cívico-militares cuando hay un optimismo difundido en los más diversos grupos sociales respecto de las expectativas sobre el futuro, que cuando el sentimiento predominante es el pesimismo.

A la vez, la existencia de un clima de optimismo generalizado permite mucha mayor libertad al enfrentar intereses sectoriales creados, porque se cuenta con el apoyo de la opinión pública. Este recurso a la opinión pública puede ser especialmente importante en los probables conflictos que se susciten a raíz de medidas como la reestructuración de Ferrocarriles y otras similares.

#### **G. ¿Secuencia de situaciones o acumulación de situaciones?**

Una pregunta relevante es qué conviene más: ¿ construir una agenda gubernamental y legislativa que vaya planteando los diversos problemas de manera secuencial, de modo que los posibles conflictos no se den simultáneamente, o distribuirlos en el tiempo para evitar que lleguen a estallar conjuntamente ?.

Por ejemplo, se puede argumentar que frente a la alta probabilidad de tensiones fuertes en las relaciones cívico-militares en el contexto del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, podría convenir especializar el primer semestre en esta materia, postergando para el segundo semestre todas las otras iniciativas.

En favor de esta **estrategia de concentración de fuerzas** se puede también argumentar que, dada la necesidad de concentrar esfuerzos en la política social, podría ser conveniente excluir de la agenda gubernamental otras cuestiones, postergándolas para oportunidades más favorables. Por ejemplo, podría ser más conveniente desplazar para 1992 iniciativas con alto potencial conflictivo, como es el caso de Ferrocarriles.

Un primer punto a considerar en este dilema sobre si **concentrar la agenda a unos pocos problemas** o si **diversificarla a varios problemas**, es el de las restricciones o urgencias que los propios problemas plantean.

Las temporalidades del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación son inalterables. No parece posible postergar el reinicio de la cuestión municipal para después del primer semestre de 1991. Es urgente definir un horizonte electoral municipal, en lo posible para comienzos de 1992. Hay problemas sectoriales, como es el caso de Ferrocarriles, que deben resolverse en los primeros meses del año por razones financieras ineludibles. Por consiguiente, enfrentamos inevitablemente una agenda diversificada desde el comienzo.

No obstante, si bien la diversificación de la agenda es ineludible, habría que considerar al respecto las siguientes prevenciones:

- a) En general, no constituye un problema el planteamiento simultáneo de diversas cuestiones potencialmente conflictivas **siempre** que ellas no se relacionen entre sí, conduciendo a crear frentes opositores unificados. En la medida en que es posible aislar los potenciales conflictos, o aún utilizarlos para atenuar oposiciones, la diversificación es aceptable y hasta conveniente.
- b) Hay que tomar en cuenta también el límite de las propias capacidades para gestionar conflictos. Una agenda demasiado diversificada puede sobrepasar las capacidades gubernamentales de manejo de ella.

En consecuencia, la diversificación de la agenda es una estrategia aceptable, mientras se atenga a las dos restricciones indicadas. Sería conveniente, en cada momento, ir haciendo una evaluación de la situación, de modo de determinar hasta qué punto admite nuevas iniciativas, o hasta qué punto es aconsejable postergar iniciativas.

Un instrumento útil para este esfuerzo de estudiar la manera más conveniente de diversificar la agenda gubernamental, respetando los criterios recién señalados, lo constituyen las **Metas Ministeriales**. A partir de ellas, es posible identificar el potencial conflictivo y riesgos inherentes a cada iniciativa, de modo de construir una agenda básica para 1991 que ordene nuestra actividad y permita ir estudiando sistemáticamente los cambios que es necesario introducir a medida que se desarrollan los acontecimientos.

## 2. ANALISIS LABORAL. LAS TRANSFORMACIONES EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO: LENGUAJE Y PARTICIPACION

El Gobierno se ve enfrentado a la necesidad de introducir importantes modificaciones a la estructura de empresas como Codelco y Ferrocarriles, así como respecto de la Corfo. En general, dos son las cuestiones que están presentes en el problema: por un lado, qué tipo de estructura se postula para estas empresas y, por otro, qué rol cabe al capital privado en sus planes de expansión. El problema se torna aún más agudo cuando se considera la percepción de los trabajadores frente a ambas cuestiones: la primera (reestructuración) aparece como sinónimo de "despidos", y la segunda como sinónimo de "privatización".

Lo cierto es que los cambios que se postulan, de suyo significativos, son la respuesta a situaciones que no admiten mayor dilación. Además, estos cambios son una oportunidad para "modernizar" en democracia; es decir, contando con la participación, y no con la marginación, de los sectores sociales involucrados.

Al respecto cabe destacar la existencia en la cultura política del sindicalismo chileno de un fuerte prejuicio en torno a todo aquello que signifique "modernización"; término que evoca racionalizaciones, despidos masivos, privatizaciones y pingües negocios para los privados que adquirieron el patrimonio estatal; en fin, imágenes que evocan los tiempos de la dictadura.

En consecuencia, los cambios son también polémicos. Representan un desafío en cuanto al modo de llevarlos a cabo con el concurso, o al menos sin la oposición frontal, de los trabajadores de las empresas involucradas.

La gran mayoría de estos trabajadores apoya políticamente al Gobierno. Los directivos de las empresas militan en los mismos partidos en que militan los dirigentes sindicales. En consecuencia, no existen -o no debieran existir- suspicacias de orden político respecto a los programas de reestructuración propuestos por el Ejecutivo. Sin embargo, en mayor o menor grado, los trabajadores han explicitado su disconformidad frente a los programas de innovación, llegando, en el caso de Ferrocarriles y Corfo, a una posición de franco rechazo.

Sin duda que algún grado de conflictividad resulta inevitable en casos como el de Ferrocarriles, en el que la reestructuración contempla la reducción de personal. Cuando se afectan intereses reales y directos de trabajadores concretos, la opción sindical no puede sino ser de rechazo a los cambios. Si el gobierno estima que tales cambios son necesarios e impostergables, el conflicto necesariamente aflorará, produciendo costos sociales y políticos inevitables.

En casos como este, evitar el conflicto supondría renunciar a planes y programas de los que depende la posibilidad de hacer viable las empresas en cuestión en el largo plazo. Eludir el conflicto es, por tanto, eludir las soluciones que tarde o temprano deberán adoptarse. Los costos económicos, sociales y políticos de una solución tardía, son proporcionalmente crecientes a la demora. Sin embargo, el problema no radica en evitar aquel conflicto que inevitablemente ha de surgir, sino en impedir que afloren conflictos evitables, derivados de un mal manejo de las relaciones laborales o de las comunicaciones.

Los conflictos laborales que se produzcan al interior de las empresas del Estado son particularmente graves por las siguientes razones:

a) Tienen a fortalecer las tesis maximalistas al interior del movimiento sindical. Es decir, aquellas que postulan que muy poco ha cambiado en las relaciones laborales con la llegada del Gobierno democrático.

b) Constituirían un visible fracaso de la concertación social en sectores que, por su afinidad ideológica al Gobierno, presentan especiales ventajas para el buen éxito de las iniciativas concertacionista.

c) Provocarían una erosión del apoyo del movimiento sindical hacia el Gobierno. Esta disminución de apoyo relativo podría ser decisiva en las elecciones de la CUT, en Noviembre próximo.

## **ESTRATEGIAS**

En la perspectiva de una exitosa gestión innovadora en las empresas del Estado, dos elementos son de fundamental importancia.

### **a) Lenguaje:**

Es imprescindible que la opinión pública perciba que los cambios propuestos por el Gobierno:

- Están destinados a fortalecer a las empresas para el mejor cumplimiento de sus funciones.
- Son necesarios y adecuados.
- Contemplan significativas diferencias, especialmente en lo relativo a la sensibilidad social respecto de las "modernizaciones" del régimen militar.

En relación al tema de las comunicaciones, conviene tener presente que:

a. Una vez que se han cristalizado las opiniones contrarias al proyecto, es muy difícil revertir la percepción ya creada. El mensaje extemporáneo es casi siempre disfuncional a los objetivos que se persiguen.

b. Si el mensaje que se envía no hace mención a los costos que supone la reestructuración -v. gr., los despidos- los trabajadores verán en él propaganda y no información.

c. Información no es participación. Participa quien tiene algo que decir en la toma de decisiones, y no quien conoce, aunque sea preferencialmente, lo que otros resuelven.

### **b) Participación:**

Las expectativas de jóvenes y trabajadores respecto del triunfo del No y del Presidente Aylwin, estaban vinculadas al deseo de participar activamente en la construcción de una sociedad que en los últimos años había prescindido totalmente de su aporte. En el mundo de los trabajadores, el deseo de participar sigue vivo y se transforma en imperiosa necesidad respecto de aquellos cambios que afectan vitalmente sus intereses, como es el caso de los cambios en Ferrocarriles.

Por otro lado, no cabe duda que la conflictividad social es inversamente proporcional a la participación de los sectores involucrados en los asuntos que les afectan. La ventaja neta e indesmentible de la participación radica en que, aunque no se llegue a acuerdos, la solución que en definitiva se adopte estará revestida de una legitimidad social de la que carecería sin la discusión y el diálogo previo.

En suma, y pese a lo importante que pueden ser las comunicaciones, ellas en ningún caso reemplazan el rol de la participación. Es más, sin esta última, crece la posibilidad de que el escenario se enturbie por la desconfianza y las suspicacias mutuas. Es en esta materia, por tanto, en la que corresponde poner énfasis si se quiere modernizar en democracia.

Finalmente, más allá del tema comunicacional, es importante que el gobierno defina en forma más precisa su propia misión y estrategia frente al tema en cuestión: más que adoptar un tratamiento "caso a caso" (FF.CC., Codelco, Corfo, etc.) debe señalarse el diseño global en que se insertan medidas de este tipo.

### 3. ANALISIS ECONOMICO

El inicio de los combates en el Golfo Pérsico prácticamente ha copado el ámbito informativo en los últimos días, constituyéndose en el componente principal de cualquier análisis económico de corto plazo.

El grado de apertura comercial y financiera que exhibe la economía chilena, sumado a la enorme dependencia del petróleo importado, obliga a los agentes económicos nacionales a estar muy pendientes de los acontecimientos en la zona del conflicto y reacciones en los principales centros financieros y bursátiles del mundo.

Además del evidente daño ecológico y humano que toda guerra involucra, los chilenos están pendientes del efecto sobre el precio del petróleo. En los días inmediatamente anteriores al conflicto, el petróleo referencial (tipo Brent, extraído en el Mar del Norte) había superado largamente los 30 dólares por barril a causa del inminente estallido bélico y la incertidumbre respecto de la efectiva correlación de fuerzas entre ambos bandos.

Después del primer día de conflicto, se percibió una superioridad tan aplastante de las fuerzas multinacionales dirigidas por EE.UU., que los mercados reaccionaron como si la guerra estuviese a punto de terminar con un resultado adverso para Irak. Al cabo de esa primera jornada, el precio del petróleo había bajado a 20.9 dólares por barril. El optimismo reinante en Occidente se manifestó también en fuertes alzas en los índices accionarios y baja en los precios de monedas duras como el Yen, el dólar y el oro.

Informaciones recientes señalan que, al cabo del segundo día de conflicto, la reacción bélica de las fuerzas iraquíes (principalmente el lanzamiento de misiles sobre Israel y Arabia Saudita) afectó el optimismo en relación a la supuesta brevedad de la guerra. Sin embargo, no cambió la percepción de que Irak no tiene fuerza suficiente para resistir el ataque aliado. El temor a un involucramiento activo de Israel en el conflicto, lo cual debilita al alianza entre países occidentales y árabes, influyó en las primeras horas de hoy provocando leves descensos en los índices accionarios de Wall Street. Sin embargo, se fue imponiendo la idea de que Israel no tomaría acciones directas - al menos por ahora - lo cual generó que la Bolsa de Nueva York cerrará con un alza de 0.16% respecto del día anterior. Por su parte, el precio del petróleo bajó levemente, a 20.2 dólares por barril.

En el mercado bursátil chileno, las reacciones fueron similares. El día Jueves el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) experimentó un alza de 5.17%; en cambio, en la primera rueda del día Viernes, se observó una baja de 1.9%. Además de los antecedentes de la guerra, hay que considerar que cuando se observa un alza muy significativa, en la jornada siguiente muchos accionistas venden sus títulos para realizar la ganancia, lo cual hace bajar levemente los precios. Esto último es válido tanto para explicar el comportamiento de Wall Street como el de la Bolsa de Santiago.

A pesar de que Chile no importa petróleo desde el Golfo Pérsico, el enorme peso de esa área en el mercado mundial hace que un eventual bloqueo de las rutas provenientes de Irán y Arabia Saudita, en caso de prolongarse el conflicto, sea decisivo en el precio del crudo proveniente de otras áreas productivas.<sup>1</sup>

---

De acuerdo a las estadísticas del primer semestre de 1990, Chile importa un 27.8% del petróleo que consume desde Nigeria, 21% desde Gabón, 15.6% desde Venezuela, 10.1% desde Colombia, alrededor de 5% desde Ecuador y una cifra similar desde Argentina, totalizando un 87.8% de petróleo importado.

Por este motivo, las autoridades chilenas han adoptado un paquete de medidas preventivas con el fin de enfrentar adecuadamente eventuales crisis de precios o de abastecimientos. Por ahora, las precauciones son bastante moderadas y no se manifestarán en perjuicios severos para la población.

El Fondo de Estabilización del Petróleo se aprobó con amplio quórum parlamentario y la restricción vehicular había sido solicitada anteriormente por motivos de congestión en Santiago. Por otra parte, se estipula la flexibilización de la restricción en zonas turísticas.

El Estado de eventual crisis mundial de la cual Chile no está ajeno, ha permitido que todas las fuerzas políticas nacionales enfrenten el problema del petróleo con una lógica de Estado. Las medidas necesarias económicas adoptadas contaron con el decidido apoyo de todos los especialistas y dirigentes políticos, porque hay acuerdo en que la primera prioridad debe ser distar lo más posible a la economía chilena de las oscilaciones coyunturales del precio del petróleo. Además, mirado políticamente, es obvio que la opinión pública sabe que el gobierno no puede evitar completamente los efectos de una crisis petrolera, por lo tanto no es rentable capitalizar descontento cuando se espera que todos colaboren en esta coyuntura desfavorable.

Un efecto transitorio del inicio de la guerra observado en los establecimientos comerciales de Santiago ha sido cierta tendencia a acaparar alimentos y combustibles, precaviendo algún efecto sobre el precio o la distribución de dichos productos. Sin embargo, esta idea debería desaparecer en los próximos días, sin alcanzar o afectar mayormente el IPC de Enero. Estimaciones confiables sitúan la inflación de este mes en valores bastante inferiores al 1% pronosticado por el Banco Central, pero restando dos semanas del mes no se puede descartar el alza sorpresiva de algunos productos. De concretarse las estimaciones el alza acumulada del IPC de los últimos doce meses llegaría entre 24.8 y 25.4% comparado con 23.1% en igual fecha de 1990.